

Más me pegas, más te quiero...

Eduardo Ballón E.

Sumilla

A 13 meses de instalado el gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, el país sigue viviendo grandes turbulencias que hacen de este tiempo el más intenso e incierto del presente siglo. La confluencia de distintas crisis que vienen desde atrás, el constante enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo, así como la nula gestión del Gobierno incrementaron los malestares y las demandas fragmentadas de sectores mayoritarios de la sociedad, a la par que evidenciaron que Pedro Castillo y Perú Libre, partido de gobierno, trocaron un discurso de compromiso con el cambio y la denuncia del orden existente, para terminar su primer año ahogados en una gestión marcada desde el primer día por el cuoteo pragmático de cargos y responsabilidades, como un Gobierno más de continuidad en la visión patrimonial del poder y en la relación clientelar e instrumental con la gente que han caracterizado buena parte de nuestra historia republicana. Reducida la política a tales enfrentamientos, con intentos constantes de vacancia presidencial y voces que amenazan con el cierre del Congreso, seguimos en lo mismo. En esencia, oficialismo y oposición, Ejecutivo y Legislativo, continúan en su empeño de destruir al adversario y en ese camino profundizan la polarización que vivimos, arrasando con lo poco que había avanzado el país. Erre que erre cada uno en su negocio de supervivencia y reproducción. Más allá de discursos y bravatas, es innegable que ni los unos ni los otros quieren irse; se necesitan mutuamente en un escenario que se va agotando, como lo evidenció la exitosa asistencia al Congreso del primer ministro, Aníbal Torres, el 18 de agosto pasado.

La resistencia al adelanto electoral que manifiestan el Ejecutivo y buena parte de los parlamentarios desnudan la precariedad y debilidad de nuestros principales actores políticos. La reciente libertad de Antauro Humala, personaje controvertido que lideró un levantamiento militar denominado «andahuaylazo», por el cual permaneció en prisión del 2005 al 2022, incorpora un nuevo jugador a este escenario, que con su discurso nacionalista y autoritario, y su cierto predicamento, será un nuevo argumento para permanecer en la continuidad, aparentando un enfrentamiento entre oficialismo y oposición con mucha bulla y poca sustancia, tal como se viene dando. Es decir, mantener la actual «estabilidad» que han construido y acomoda a ambos bandos, y que, en sentido estricto, no ha afectado ni a los grandes intereses ni a la lógica del modelo.

UNA MEDICIÓN DE OPINIÓN ENCARGADA POR LA CONSULTORA APOYO a la empresa de investigación Ipsos Perú sobre la percepción de desarrollo y la situación económica del país, mostraba en junio pasado que 67% de encuestados y encuestadas creían que, en materia de progreso, estábamos retrocediendo¹. Las respuestas revelaban el porcentaje más alto de malestar desde inicios de la década del 90 del siglo pasado, cuando se empezó a hacer esta pregunta: dos de cada tres personas interrogadas percibían que nos encontrábamos en retroceso, mientras que quienes pensaban que progresábamos eran apenas un 3%, el valor más bajo desde que se hace la pregunta. Esa valoración, coincidiendo con el inicio de la crisis política que nos mantiene entrampados hasta hoy, viene incrementándose desde el 2017 y aumentó 15 puntos desde julio del 2021, cuando se inició el gobierno actual.

En ese julio del 2021, el maestro rural Pedro Castillo, sometido a una brutal demolición por distintos sectores de la derecha y muchos de los medios de comunicación que insistían en denunciar un supuesto fraude en su elección, emergía como presidente con 53% de aprobación, sin la confianza de la elite y mostrando un abismo electoral donde su aprobación en Lima era de 40%, fuera de Lima

¹ Ipsos Perú. *Informe de Resultados. Percepción de desarrollo y situación económica Perú, 10 de junio de 2022*. Lima: Ipsos Perú, 2022. Ver en: bit.ly/3dfRnRA

de 59% y en el Perú rural de 68%². Simultáneamente, la confianza en la futura administración era baja (16%), señal de que no habría «cheque en blanco». Tales resultados mostraban que el nuevo presidente iba a encontrar un panorama muy complicado: una alta expectativa y presumiblemente varias y distintas demandas de quienes votaron por él, y una sensación de incertidumbre de todos y todas.

A 13 meses de instalado el mandatario, el país sigue viviendo grandes turbulencias que hacen de este tiempo el más intenso e incierto del presente siglo. La confluencia de distintas crisis que vienen desde atrás, el constante enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo, así como la nula gestión del Gobierno incrementaron los malestares y las demandas fragmentadas de sectores mayoritarios de la sociedad, a la par que evidenciaron que Pedro Castillo y Perú Libre, partido de gobierno, trocaron un discurso de compromiso con el cambio y la denuncia del orden existente, para terminar su primer año ahogados en una gestión marcada desde el primer día por el cuoteo pragmático de cargos y responsabilidades, como un Gobierno más de continuidad en la visión patrimonial del poder y en la relación clientelar e instrumental con la gente que han caracterizado buena parte de nuestra historia republicana.

13 meses entre la vacancia y el cierre del Congreso

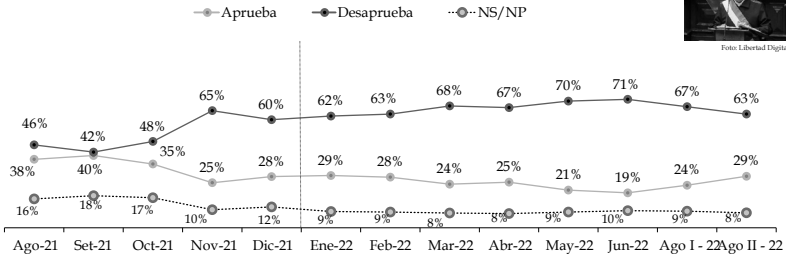
Al mes de iniciado su mandato, la desaprobación del presidente empezó a crecer indeteniblemente hasta junio del presente año. Desde la designación del primer gabinete se evidenció, por si hiciera falta, que se trataba de un Gobierno con un claro carácter plebeyo y con una voluntad desordenada de cambio y reforma, con distintas y desiguales voces en su interior, y lejos de una

² Ballón, Eduardo. «¿El agotamiento de un ciclo?». En: **desco** - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, ed. *Perú Hoy. 5 años de pandemia*. Lima: **desco**, 2021. Ver en: bit.ly/3xrM20t

visión y una estrategia compartidas claramente. Un Gobierno que se organizaba a partir del cuoteo entre los distintos grupos que lo integraban, más allá de Perú Libre, partido que los albergó en la campaña. El gabinete expresaba ese carácter plebeyo e inevitablemente tumultuoso, repleto de historias y trayectorias polémicas de varios/varias de sus integrantes, así como de una eventual falta de capacidad y experiencia generalizada. Más aún, en un marco donde la improvisación se hizo visible en la designación de distintas funcionarias y funcionarios públicos alejados de los perfiles y capacidades mínimas requeridas, facilitando el trabajo de una oposición encrespada en medio de una polarización que nunca se detuvo.

Como lo muestra el gráfico n° 1, entre setiembre del 2021 y junio de este año, la desaprobación del presidente se incrementó en 29 puntos, mientras que su aprobación descendía en 21 puntos. Su desaprobación, que llegaba a 71% este último junio, era definitivamente unánime: el gobernante resultaba desaprobado en todas las macrozonas, por todos los grupos de edad, sexo y nivel socioeconómico, identificación ideológica –derecha, centro e izquierda–, así como por la mayoría de quienes quieren cambiar la Constitución y tienen algún interés por la política. Así pues, ni el incremento de quienes creían que debemos ir a una nueva Constitución lo salvaba de la percepción negativa de su mandato.

Gráfico n° 1
Aprobación y desaprobación de Pedro Castillo
(agosto del 2021 - agosto del 2022)



Fuente: Instituto de Estudios Peruanos (IEP). *Informe de Opinión - Agosto II 2022*. Lima: IEP, 2022.

Para fines del pasado junio, el Ejecutivo había visto pasar ya cuatro gabinetes, acumulaba más de 65 ministros (con sectores como Interior, Agricultura y Energía y Minas que sumaban más de cinco cada uno), cerca de 70 viceministros, 5 secretarios de la presidencia distintos y por encima de un centenar de designaciones fallidas (nombramientos cuestionados por la Contraloría de la República y/o por los medios de comunicación). Las acusaciones de cuoteo y clientelismo en la designación de funcionarios y funcionarias multiplicándose, y dando cuenta de los varios anillos del mandatario –los parientes, los chotanos, los profesores, Cerrón y los perulibristas, así como aquellos/aquellas que se subieron al carro desde la primera vuelta electoral–, no hablan de hechos distintos a los vividos antes. Los casos son más groseros y vienen siendo amplificados por sectores de la prensa dedicados a una fiscalización implacable, muchos de ellos comprometidos con las/ los vacadores de la derecha más extrema, mostrándose denuncias e indicios de corrupción como constante en sectores con abundancia de recursos (como Transportes y Comunicaciones, o Vivienda y Saneamiento), siendo todo esto una película conocida. En los últimos meses, las acusaciones y apremios fiscales al círculo más

próximo del mandatario, así como las carpetas que lo vinculan directamente a él, hacían las cosas más difíciles.

Por si fuera poco, la inicial bancada de gobierno en el Congreso, pasó de contar con 37 integrantes a tener apenas 16. En ese escenario opaco y falto de transparencia, el Ejecutivo, al año de gestión, tenía muy poco que mostrar: apenas el esfuerzo inicial del ex ministro de Salud, Hernando Zeballos, continuando con la vacunación; el intento desestimado por el Gobierno a propuestas de su propio ministro de Economía, en ese entonces, Pedro Francke, por tomar medidas en dirección a una reforma tributaria; y el discurso nunca materializado de la segunda reforma agraria.

Paradójicamente, la principal palanca del Ejecutivo fue, también desde el primer momento, el Congreso de la República, cuya desaprobación se incrementó sostenidamente entre agosto de un año y de otro, pasando de 61% a 87%, alcanzando apenas el 8% de aprobación. Recordemos que la votación que eligió a Castillo reeditó la elección del 2016, con un Ejecutivo en franca minoría congresal, sumando en el mejor de los casos 49 votos. Al frente, una derecha radical que no aceptaba su derrota –Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País– con el mismo número de representantes, quedando Acción Popular (AP) y Alianza Para el Progreso (APP) como dirimientes. Mientras los primeros apostaron siempre por la vacancia, los segundos lo hicieron por la penetración y «captura» del nuevo gobierno. Para completar la figura, y como fuera notorio desde la primera vuelta, Perú Libre, más allá de su marxismo acartonado y de manual, comparte posiciones con la derecha extrema en materias como el enfoque de género, la centralidad de la familia, la violencia contra la mujer, el aborto y un largo etcétera, expresando la mirada y distancia en estas materias de sectores significativos del mundo popular, urbano y especialmente rural.

Los extremos en el Legislativo comparten el señalamiento de los «caviares» como su enemigo fundamental, tanto como intereses que

los llevan a proteger la informalidad y la opacidad en el transporte, las actividades extractivas, la gestión de terrenos y la educación. Como recordaba Sinesio López, un elemento crítico de nuestro sistema político es la forma de gobierno, un presidencialismo «parlamentarizado», que es aliciente al chantaje y al golpe cuando el Ejecutivo carece de mayoría en el Congreso³. Más grave aún en un parlamento como el actual, con partidos «franquicia» y/o con «propietarios».

Ante el fracaso de sucesivas mociones de vacancia, la «labor de fiscalización» del Congreso se manifestó en la multiplicación de interpelaciones (25 presentadas, 10 admitidas), en presión que llevó a la renuncia de varios ministros y ministras, y en la proliferación de comisiones investigadoras sobre el Gobierno, ninguna de las cuales ha dado resultados. Su «trabajo legislativo» supuso más de 2000 proyectos de ley, una cuarta parte de los cuales eran declarativos y más del 85% que no contemplan sus costos. Su interés mayor estuvo en distintas contrarreformas (ampliación del plazo de inscripción electoral en las elecciones de octubre cuando ya estaban convocadas, recomposición del directorio de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria –Sunedu–, regulación de la cuestión de confianza, eliminación del referéndum para reformas constitucionales, revisión de los textos escolares por los padres y madres de familia) y en el blindaje a personajes como Merino, Flores Aráoz, Chávarry y Edgar Alarcón. Y si al inicio del gobierno eran 9 bancadas, hoy son 15, más 5 congresistas «libres», como resultado del transfuguismo instalado como práctica frecuente. También habría que mencionar que por espectáculo tampoco se quedaron atrás, tal como se ha evidenciado, entre otras cosas, con el comportamiento recurrentemente prepotente, racista y discriminador de su ex presidenta, Maricarmen Alva, así como con el proceso de elección de la nueva mesa directiva del Congreso.

³ López, Sinesio. «Golpe de Estado permanente (1)». *larepublica.pe*, Lima, 20 de enero del 2022. Ver en: bit.ly/3LgJbn7

Nuevas y nuevos jugadores en el escenario y la respuesta presidencial

La judicialización de la política⁴, resultado de la propia debilidad de los principales actores de ella, se instaló desde tiempo atrás, facilitando el protagonismo creciente de nuevas y nuevos jugadores en el escenario. El juicio contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y la posterior incursión política del juez Sergio Moro (quien llevó el caso de Lula), pusieron en discusión el concepto del *lawfare* para referirse al ataque contra adversarios políticos usando indebidamente los procedimientos legales para aparentar legalidad⁵. En nuestro país, ese proceso se aceleró en los últimos años por los «méritos», entre otros, de nuestros sucesivos mandatarios a partir de Alberto Fujimori, introduciéndose así nuevos actores y actrices en el reparto de la película que estamos viviendo en función continuada. Es así que jueces y fiscales han aparecido en nuestro escenario político, pues la sucesión y multiplicación de escandalosos casos de corrupción que alcanzan reiteradamente a los niveles más altos y visibles de la política, lo han hecho inevitable, al tener estos que impartir justicia y actuar contra quienes delinquen.

Las seis carpetas fiscales abiertas contra el presidente de la República son, desde junio pasado, parte del espectáculo diario y el refuerzo que requieren las/los vacadores, cada vez más desgastados. El mandatario es indagado por múltiples razones que van desde el plagio de su tesis de maestría, hasta su participación en distintas licitaciones fraudulentas que tienen a su esposa y a la

⁴ En sentido estricto se designa así al proceso por el cual un sector de la sociedad busca en la vía judicial determinados objetivos que no consiguió en los espacios tradicionales de la política, Ejecutivo o Legislativo, donde por lo general se adoptan decisiones públicas.

⁵ Sobre el particular, ver: Romano, Silvina. «Lawfare y neoliberalismo en América Latina: una aproximación». *Revista Sudamérica*, n.º 13. Mar del Plata: Centro de Estudios Sociales y Políticos - Facultad de Humanidades - Universidad Nacional de Mar del Plata, 2020, pp. 14-40. En: bit.ly/3qG1Icz

hermana menor de ella en la mira del Ministerio Público. La compra de biodiésel en Petroperú, los ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía, la obra del puente Tarata y la mafia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), así como las circunstancias de la destitución del ex ministro del Interior, Mariano González, completan el rosario de investigaciones que en varios momentos sindicaron a Castillo Terrones como jefe de una banda criminal.

Más allá de los indicios y los testimonios, muchos significativos y cada vez más próximos al profesor, la campaña abierta desde la Fiscalía, que por instantes parece corresponsalía de distintos medios de comunicación que en minutos reciben copias completas de las declaraciones, versiones íntegras de los hallazgos y primicias de las intervenciones que se suceden, ha hecho de esta institución y de su actual titular más protagónicas de lo que fueran los últimos años, que no es poco decir. Protagonismo que es sorprendente porque ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial alcanzaban el 15% de confianza en la medición de marzo de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho)⁶, entre otras cosas quizá por la cantidad de indagaciones e investigaciones en curso que tienen abiertas desde hace años, con escasos resultados, como es notorio.

Sorprendentemente, a partir de junio, cuando el asedio y los agobios al mandatario arreciaban, la aprobación presidencial empezó a incrementarse. El presidente, ya distanciado de las pugnas y disputas con Perú Libre y con los sectores que lo apoyaron inicialmente, se sintió más confiado en el éxito que le permitieron sus alianzas coyunturales, pragmáticas y cambiantes de acuerdo a sus necesidades, asegurándose así los votos para evitar la vacancia en el Congreso, pasando desde fines de mayo a una ofensiva que le da réditos. A los Consejos de Ministros Descentralizados les sumó sus constantes viajes al interior en modo campaña primera

⁶ Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). *Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones: Octubre 2021 - Marzo 2022*. Lima: INEI, 2022. En: bit.ly/3BM62xw

vuelta, las reuniones con distintas bases sociales en modo clientelar, así como el empleo de una retórica polarizadora, combinada con la victimización que le facilitan la oposición y buena parte de los medios de comunicación.

En el caso de las acusaciones judiciales, si al mucho ruido y pocas nueces de la acción fiscal y de la administración judicial le añadimos que no se tratan estas de instituciones exentas de corrupción (recordemos a Pedro Chávarry, Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez, Luis Arce y César Hinostroza), a lo que sumamos, además, algunas de las sorprendentes decisiones de la titular del Ministerio Público (que involucran dos casos en los que sus hermanas son parte), entendemos mejor el éxito relativo de la estrategia del presidente frente a los órganos de justicia, que cuando debiera ser su momento más difícil, se encuentra en uno en el que, a pesar de los apremios, su aprobación crece en las encuestas, como ya hemos señalado, alcanzando el 47% en el Sur y el 40% en el medio rural, aunque su desaprobación sea mayor en todos los segmentos.

En este sentido, quienes esperan que la justicia haga el trabajo que buena parte de las/los congresistas pretenden, vale decir la vacancia presidencial, pueden pecar de entusiastas. El mandatario, que ya ha demostrado su capacidad para aprovechar todos y cada uno de los pecados y desaciertos de las/los parlamentarios, enfrenta ahora la judicialización de sus acciones y comportamientos, convocando limitadamente a sus clientes y victimizándose una vez más frente a un sistema que lo combate desde el sótano de la desaprobación y con argumentos frecuentemente deleznable como la traición a la patria. El quinto de la población, que difícilmente se movilizará, pero que hasta ahora parece el respaldo duro de Pedro Castillo, no cree que el esfuerzo en curso sea estrictamente judicial, como insiste la Fiscal de la Nación; en la polarización existente, alentada desde ambos bandos, la defensa agresiva del mandatario que desvía la atención de los problemas de gestión y

corrupción del gobierno, le da buenos resultados y cohesiona el apoyo que tiene⁷.

La economía en un Gobierno que no gobierna

Tras la fuerte recesión del 2020 que cortó un ciclo de crecimiento continuo, el 2021 el Producto Bruto Interno (PBI) peruano creció 13.1%, alcanzando el nivel anterior a la pandemia. De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), ese año las inversiones nuevas regresaron a la media del periodo 2013-2019, las reinversiones crecieron por encima de la media de dicho periodo y fue el año del superávit comercial más grande de la historia con 14 833 millones de dólares. A pesar de tales números y de esa recuperación, cifras recientes de pobreza dan cuenta de un retroceso de 10 años. Más de 8.6 millones de personas se encuentran en pobreza y poco más de 1.3 millones en pobreza extrema⁸. Esta situación se ha acentuado en las ciudades, donde se concentran hoy 5.9 millones de pobres (69% del total). En las grandes ciudades, donde vive más del 40% de la población del país, la pobreza pasó del 13.2%, antes de la pandemia, a 23.1% el 2021. Este retroceso se explica porque no se ha recuperado la tasa de ocupación y por la fuerte precarización del empleo. Así, para octubre del 2021, el 78.2% de la Población Económicamente Activa (PEA) se encontraba en la informalidad (la cifra más alta en los últimos 10 años), el trabajo era menos productivo que antes y el nivel de ingresos promedio se encontraba por debajo de cinco años atrás.

⁷ Sobre el particular, ver: Asensio, Raúl. «La tercera vida del presidente Castillo». *elcomercio.pe*, Lima, 1 setiembre del 2022. En: bit.ly/3Dujjfb

⁸ De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el número de personas que pasaron a la pobreza durante la pandemia el 2020 en el Perú se incrementó en 13 puntos porcentuales, de 15.4% a 28.4% de la población. En tanto, la cantidad de personas en situación de pobreza extrema escaló 5.6 puntos porcentuales, de 3% a 8.6%.

La recuperación del empleo se ha dado en el sector informal, mientras el sector formal ha perdido más de 720 000 puestos de trabajo entre el 2019 y el 2021. En este escenario, el gasto de los hogares no se ha recuperado y está 10.7% por debajo del 2019. En Lima, los gastos reales están 16.6% por debajo de la prepandemia y aunque en las zonas rurales hay una recuperación de 1.8%, esta es liderada por los hogares más ricos, exacerbándose así las desigualdades. Los datos son graves ante la inminente crisis alimentaria que atraviesa el mundo y que pondría en riesgo a 15.5 millones de personas en nuestro país, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)⁹.

Por su parte, los riesgos relacionados con los mayores precios de la energía y los alimentos, así como las dificultades en las cadenas de suministros, previstos desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, se han materializado dada la prolongación del conflicto y los estrictos confinamientos en China por la pandemia. Estos eventos implicarán un menor crecimiento mundial y una mayor inflación global, lo que puede llevar a mayores alzas en las tasas de interés de la política monetaria. De esta manera, se prevé una tasa de crecimiento mundial de 3% para el 2022 y 2023, frente a las expectativas anteriores de casi 4%.

Estos choques –sumados a una expansión de la demanda y a un mercado laboral ajustado– han contribuido a mantener la inflación al alza en la mayoría de las economías desarrolladas. En las economías emergentes, en particular de América y Europa, se observa también una marcada tendencia al alza. Considerando

⁹ El diagnóstico del Índice Global del Hambre (IGH) para el Perú en el 2020 ya era desfavorable. El IGH nacional se situaba en 17.0 puntos, lo que significaba un retroceso de más de seis años. Lambayeque, Ica, San Martín, Tacna y Moquegua eran los departamentos con menor incidencia de hambre (todos estos con zonas vinculadas a la agroexportación). Realidad opuesta experimentaban los departamentos de la Sierra y Selva que han sido fuertemente golpeados por la pandemia, como en Apurímac, Huancavelica, Ucayali, Loreto, Huánuco, Ayacucho y Cusco, que se ubicaban en la escala de hambre «grave». Sobre el particular, ver: bit.ly/3QLXzOP

este hecho y ante los riesgos de un desanclaje en las expectativas de inflación, los bancos centrales han llevado a cabo ajustes en la política monetaria por encima de lo esperado a inicios de año. Los riesgos de estanflación, donde se presenten tasas altas de inflación y bajas de crecimiento, han aumentado definitivamente.

Con una tasa de crecimiento a la baja, proyectada en 2.8% –algunos analistas hablan ya de 2%– y un proceso inflacionario que a julio se encontraba en 8.74%, con reservas internacionales netas que todavía nos permiten enfrentar la situación con tranquilidad relativa, pero con severas dificultades en el empleo, lo que resta del 2022 y especialmente el 2023 serán tiempos duros en el terreno de la economía, agravados por el desplome de la política.

Al respecto de estas dificultades, todo indica que la opción del Gobierno, como hasta ahora, será la de la continuidad, vale decir, mantener el peso del BCRP y la importante autonomía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el manejo de la economía, donde el mayor o menor acento neoliberal lo pondrá el ministro y su capacidad de convencer al presidente, cuyos intereses resultan menudos y no chocan con la gran empresa, tal como lo demuestra su desinterés por el intento de Francke de abrir paso a una reforma tributaria.

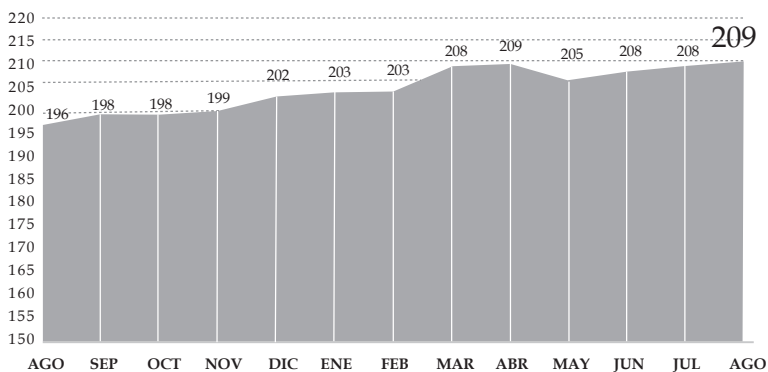
Y la sociedad, ¿qué?

En un escenario con actores políticos precarios, incapaces de estructurar la opinión pública y trazar líneas verosímiles, a algunos/ algunas les sorprende una sociedad desmovilizada, distante de la política y su espectáculo, harta de malestares recurrentes, en permanente estado de desconfianza y atravesada por distintos clivajes. Fragmentada y activa alrededor de demandas puntuales como parte de la conflictividad social creciente que se observa, la expectativa que despertó en ciertos sectores este Gobierno está en caída, descendiendo su aprobación mensualmente.

Sin capacidad de articulación y construcción de una agenda compartida, las organizaciones sociales tradicionales y los nuevos activismos pugnan contra distintas y particulares manifestaciones de la desigualdad, luchando desde su perspectiva por derechos, pero desde una distancia muy grande –cultural, de socialización y de formas de vida– y desde una desconfianza significativamente instalada en ambas partes, lo que expresa las brechas y el desconocimiento que existe entre ellas, así como el fuerte debilitamiento de la confianza interpersonal.

Al cierre de este artículo, el 30 de agosto, es claro que, en este escenario difícil y convulso, la conflictividad social viene creciendo sistemáticamente. En este mes, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, se sucedieron 209 conflictos sociales y 367 acciones de protesta (ver el gráfico n° 2). Desde el inicio de esta gestión presidencial, el promedio mensual de conflictos supera ya los 203, mientras que el de las acciones de protesta alcanza las 255. Como resultado de los conflictos y de su mala gestión por el Gobierno, en sus primeros 13 meses se produjeron 24 muertos y 494 heridos en distintos enfrentamientos, la mayoría de ellos con la Policía.

Gráfico n° 2
Conflictos sociales en el Perú
(agosto del 2021 - agosto del 2022)



Como es evidente, los conflictos más visibles están vinculados a las actividades extractivas, en particular la minería, alentados por el alza de precios de los *commodities* y la incapacidad del Gobierno para negociarlos. La conflictividad se ha incrementado en los últimos meses por el aumento del costo de vida y por la inflación, agravadas por la pasividad gubernamental y por su incapacidad, y la de los actores políticos, de acordar políticas proactivas. En el corto plazo, que seguirá calentándose, campesinos, pequeños agricultores y agricultores familiares radicalizarán sus medidas ante la ausencia de una política agraria, la falta de fertilizantes y el encarecimiento de todos los insumos.

Un factor que requiere especial atención por su fuerza y que ha adquirido particular visibilidad y dinamismo en la conflictividad es el de la minería informal e ilegal¹⁰. Esta segunda mueve más dinero que el narcotráfico. El oro ilegal que se exporta se estima en US\$ 3900 millones anuales, según datos del 2020 del Ministerio de Energía y Minas, mientras el 2019 la producción ilegal llegó al 29% de la formal, donde 80% de las/los mineros ilegales e informales trabajan sobre concesiones de terceros. Así pues, en los últimos años nos encontramos en un ciclo de gran expansión de este sector, donde uno de los datos más fuertes es el ingreso de distintas comunidades campesinas a esta actividad, como labor complementaria o como principal fuente de ingresos, presionadas muchas veces por su retornantes o por actores externos que buscan incorporar nuevos territorios a la minería informal.

¹⁰ Sobre el particular, ver: Valdés, Ricardo; Basombrío, Carlos y Vera, Dante. *Las economías criminales y su impacto en el Perú. ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde?* Lima: Capital Humano y Social S.A. - Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) - Capital Humano y Social Alternativo, 2021. Ver también: Valdés, Ricardo; Basombrío, Carlos y Vera, Dante. *Minería no formal en el Perú. Realidades, tendencias y ¿soluciones?* Lima: Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), 2019.

Este estrato de minería presenta también nuevas características¹¹. Ya no solo es aurífera sino que incorpora otros metales, como el cobre, dado su precio. Se encuentra cada vez más frecuentemente en los territorios con la mediana y la gran minería, y disputa por el control de las concesiones. Lo que viene ocurriendo en varias provincias de Apurímac y Cusco, y en otras regiones como La Libertad, Puno, Arequipa, etc., con enfrentamientos y hasta quema de campamentos, es un ejemplo de este nuevo escenario de disputa entre la minería formal y la informal. Es un sector que ha acumulado poder económico e influencia, beneficiándose desde hace un buen tiempo de los ciclos de precios altos, lo que se traduce en influencia política y social, penetración en esferas del Estado (por ejemplo, en el sistema de justicia, las fuerzas del orden, municipios distritales y provinciales, congresistas y hasta algunas/ algunos ministros en varios gobiernos –este incluido– cercanos al sector). Varios de estos grupos optan por contratar gente armada para imponer condiciones, controlar espacios y desalojar a otros grupos de mineros, como aparentemente ocurrió en Caravelí en mayo pasado, donde se registraron por lo menos siete muertos.

Para concluir

A poco más de un año de las elecciones del 2021, parece evidente que la situación va cuesta abajo en la rodada. Tras largos meses de constantes enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, que empezaron con la cantaleta del fraude electoral, que continuaron con los intentos constantes de vacancia presidencial y con las voces que amenazaban con el cierre del Congreso, seguimos en lo mismo. Tanto, que incluso las denuncias iniciales de la trampa electoral continuaron navegando en las investigaciones en el Congreso.

¹¹ Sobre el particular, ver: De Echave, José. «Minería informal y violencia. ¿Dónde estamos?». *cooperacion.org.pe*, Lima, 14 de junio del 2022. En: bit.ly/3QM30NJ

En esencia, oficialismo y oposición, Ejecutivo y Legislativo, continúan en su empeño de destruir al adversario y en ese camino profundizan la polarización que vivimos, arrasando con lo poco que había avanzado el país. Erre que erre cada uno en su negocio de supervivencia y reproducción.

Más allá de discursos y bravatas, es innegable que ni los unos ni los otros quieren irse; se necesitan mutuamente en un escenario que se va agotando, como lo evidenció la exitosa asistencia al Congreso del primer ministro, Aníbal Torres, el 18 de agosto pasado. La resistencia al adelanto electoral que manifiestan el Ejecutivo y buena parte de los parlamentarios desnudan la precariedad y la debilidad de los principales actores políticos. La reciente libertad de Antauro Humala, personaje controvertido que lideró un levantamiento militar llamado «andahuaylazo», por el cual permaneció en prisión del 2005 al 2022, incorpora un nuevo jugador que, con su discurso nacionalista y autoritario, y su cierto predicamento, será un nuevo argumento para permanecer en la continuidad, aparentando un enfrentamiento entre oficialismo y oposición con mucha bulla y poca sustancia, tal como se viene dando. Es decir, mantener la actual «estabilidad» que han construido y acomoda a ambos bandos, y que, en sentido estricto, no ha afectado ni a los grandes intereses ni a la lógica del modelo.

En una sociedad signada por su carácter desformal como la nuestra, las/los individuos enfrentan, en las distintas relaciones que tienen (sean formales, informales o ilegales), una falta de formas que se convierten en juegos constantes de asimetría de poder. No en vano el sociólogo y filósofo Francisco Durand, a propósito de nuestra economía, llamó a nuestro país como «el Perú fracturado», básicamente en tres zonas (formal, informal e ilegal), cada una con su propia burguesía, sus propias normas e interactuando todas juntas¹². Es por ello que tanto el actual Ejecutivo como el

¹² Durand, Francisco. *El Perú fracturado: formalidad, informalidad y economía delictiva*. Lima: Fondo Editorial del Congreso, 2007. Ver también, del mismo autor:

Congreso son relativamente representativos, qué duda cabe, de los comportamientos y de las características de importantes sectores de nuestra sociedad¹³.

«Socioeconomías informales y delictivas». En: **desco** - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, ed. *Perú Hoy. El Perú Subterráneo*. Lima: desco, 2013.

¹³ Como recuerda Norberto Bobbio, la representación tiene significados que se refieren a la acción según ciertos cánones de comportamiento, y otros que aluden a una dimensión de reproducción de propiedades y peculiaridades existenciales de los representados. Sobre el tema, ver: Bobbio, Norberto y Matteucci, Nicola. *Diccionario de política (segundo volumen)*. México D.F.: Siglo XXI editores, 1986, pp. 1425-1433.